

Santiago, dieciséis de junio de dos mil veinticinco.

A fojas 62, a lo principal, cuarto y quinto otrosíes, téngase presente y estese a lo que se resolverá; al primer otrosí, por evacuado el traslado; al segundo otrosí, no ha lugar; al tercer otrosí, por acompañados.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º. Que esta Sala admitió a tramitación el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido a fojas 1 por Jorge Enrique Said Yarur respecto del artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, en su texto previo a su modificación por la Ley N° 20.886, en el proceso Rol N° 2056-2025, sobre recurso de casación en el fondo, seguido ante la Excma. Corte Suprema;

2º. Que, para pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento, la Sala confirió traslado por el plazo de diez días a las demás partes en la gestión *sublite*, traslado que fue evacuado a fojas 62 por Salvador Cornelio Said Somavía, instando por la inadmisibilidad de la acción impetrada conforme a la causal del numeral 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (LOCTC);

3º. Que la Sala ha arribado a la conclusión de que, en la especie, concurre efectivamente la causal de inadmisibilidad del requerimiento prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la LOCTC -en relación con el artículo 93, inciso undécimo, de la Constitución Política-, ya que el requerimiento de fojas 1 adolece de falta de fundamento plausible, conforme se explicará;

4º. Que, en lo atinente a la causal de inadmisibilidad del artículo 84 N° 6 LOCTC, esta Magistratura ha sostenido que la exigencia constitucional y legal de fundamentar razonablemente un requerimiento de inaplicabilidad, para los efectos de declarar su admisibilidad, supone una *“condición que implica -como exigencia básica- la aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente”*, agregando que *“la explicación de la forma en que se produce la*

contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la base indispensable de la acción ejercitada” (entre otras, STC roles N°s 482, 483, 484, 485, 490, 491, 492, 494, 1665, 1708, 1839, 1866, 1935, 1936, 1937, 1938, 2017, 2050, 2072, 2088, 2089, 2090, 2227, 2349, 2494, 2549, 2622, 2630 y 2807).

Además, ha declarado que “en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sólo ha sido autorizado por la Carta Fundamental para efectuar el control de constitucionalidad concreto de los preceptos legales objetados y, por consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de competencia de los jueces del fondo” (entre otras, STC Rol N° 2775).

Por otro lado, este Tribunal Constitucional ha consignado que el “fundamento plausible” exige que se esté en presencia de un conflicto constitucional, esto es, frente a una contradicción directa, clara y precisa del precepto legal eventualmente aplicable a un caso concreto con la Constitución, lo que desvirtúa la alegación de mera legalidad o que las problemáticas que presente la requirente sean corregidas por las vías recursivas ordinarias, puesto que el parámetro de contraste es la Constitución y no la ley, dado que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad busca garantizar la supremacía constitucional” (así, resoluciones de inadmisibilidad en causas roles N°s 4696, 5124 y 5187, entre otras);

5°. Que, del estudio del contenido del libelo y de los antecedentes que obran en autos, esta Sala concluye que la acción deducida en autos no da cumplimiento -en los términos expuestos en el considerando que precede- a la exigencia constitucional y legal de encontrarse razonablemente fundada.

En efecto, si bien la parte requirente alega que, en el caso concreto, la aplicación del precepto legal que impugna *“vulneraría el artículo 6°, 76 y 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que, al arbitrio del máximo sentenciador, se estaría dando vigencia a una norma legal derogada, transgrediendo: a) el principio de legalidad; b) el principio de igualdad; c) el principio de inexcusabilidad, y d) la garantía constitucional del debido proceso”* (fojas 4), lo cierto es que no explica la

aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución;

6°. Que, como indica el mismo requirente, la gestión pendiente consiste en un recurso de casación deducido por su parte, encontrándose pendiente el pronunciamiento sobre la admisibilidad por parte de la Excma. Corte Suprema.

Añade que “en caso de que la Excelentísima Corte Suprema aplique el derogado artículo 200 del Código de Procedimiento Civil como fundamento para declarar desiertos los recursos de casación deducidos por esta requirente en el ingreso Civil / 2056-2025, transgrediría el artículo 6 de la Constitución Política de la República que regula el principio de legalidad, pues no sometería su acción a las normas legales vigentes dictadas en razón de nuestra Carta Fundamental, y más grave aún, sancionaría severamente a esta requirente en base a un precepto legal derogado. Es decir, sancionaría a esta requirente sin amparo normativo.” (fojas 9);

7°. Que lo cierto es que la comparecencia al recurso de casación bajo sanción se deserción, se erige como una carga procesal de las partes que, ni en abstracto ni en su aplicación al caso concreto, permite a esta Sala divisar una infracción a la Carta Fundamental.

Baste en ese sentido, reiterar lo que este Tribunal Constitucional ha consignado en el sentido que *“como lo ha declarado esta Magistratura en otras resoluciones de inadmisibilidad recaídas en requerimientos en que se impugnaba el mismo artículo segundo transitorio de la Ley N° 20.886, sobre tramitación digital de los procedimientos judiciales-, ‘esta Sala no logra vislumbrar un conflicto constitucional por la aplicación de uno o más preceptos legales a una gestión judicial concreta. Más bien, se constatan alegaciones de mérito y de mera legalidad, así como de aplicación de la ley en el tiempo, frente a la carga procesal de comparecer y hacerse parte ante el Tribunal Superior dentro de plazo legal, so pena de declararse la deserción del recurso.’ (Rol N° 14.429-23 INA).”.*

En sentido similar, en la resolución de inadmisibilidad recaída en causa Rol N° 11.162-21-INA (requerimiento que impugnaba los artículos 201, del Código de Procedimiento Civil, y 32, de la Ley N° 18.287 que establece el Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local), se consignó que *“las reglas sobre aplicación de la ley en el tiempo y efectos de la derogación son claras, y no existe conflicto constitucional en dicha*

aplicación, por lo que no puede pretenderse oblicuamente y sin más eliminar una carga procesal porque la ley la eliminó a futuro, desconociendo los efectos de la ley en el tiempo que, a todo evento, constituyen un asunto de legalidad y no de constitucionalidad, y por ende de resorte de los jueces del fondo, todo lo cual deja de manifiesto la falta de fundamento plausible del presente requerimiento" (c° 6°).

Asimismo, en resolución de inadmisibilidad recaída en causa Rol N° 9784-20- INA (requerimiento que impugnaba los artículos 197, incisos segundo y tercero, y 776, inciso segundo, Código de Procedimiento Civil, en su texto previo a su modificación por la Ley N° 20.886), esta Magistratura declaró que *"no se vislumbra infracción o conflicto constitucional alguno que deba resolver esta Magistratura Constitucional, como pretende la actora en relación con el artículo 19 N°s 2 y 3 de la Carta Fundamental, frente al mero incumplimiento o no ejercicio de sus derechos y cargas procesales en forma" (c° 7°). Estos motivos de inadmisibilidad son igualmente aplicables al caso concreto de autos."* (inadmisibilidad Rol N° 15.191-24 INA, c°6°);

8°. Que tampoco se observa la alegada vulneración al principio de legalidad (artículo 6 constitucional) ni al principio de inexcusabilidad (artículo 76 de la Carta Fundamental), pues estas alegaciones se sustentan en que el juez del fondo estaría aplicando una norma derogada, asunto que es de mera legalidad y que debe resolver dicho juez del fondo, mas no envuelve un conflicto constitucional que deba resolver esta Magistratura, al quedar fuera del marco de las atribuciones específicas que este Tribunal detenta conforme al numeral 6° del artículo 93 de la Constitución Política;

9°. Que, en las circunstancias referidas, se concluye por esta Sala que no existe fundamento plausible en la acción deducida en autos, lo que determina su necesaria inadmisibilidad, conforme será declarado.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 6°, e inciso decimoprimer, de la Constitución Política de la República y en el artículo 84, N° 6, y demás pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:



- 1) Que se declara inadmisibile el requerimiento deducido a fojas 1.
- 2) Que se deja sin efecto la suspensión del procedimiento decretada. Ofíciase al efecto.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTTOYA, quien estuvo por declarar admisible el requerimiento, por estimar que no se verifica a su respecto ninguna de las causales de inadmisibilidad que dispone el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional, planteando el requerimiento un conflicto constitucional que debe ser resuelto por el Pleno de esta Magistratura en sentencia de fondo.

Notifíquese y comuníquese.
Archívese.

Rol N° 16.456-25 INA.



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 16/06/2025

Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 16/06/2025

Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 16/06/2025

Mario René Gómez Montoya
Fecha: 16/06/2025

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional.

María Angélica Barriga Meza
Fecha: 16/06/2025



F82A9765-6A5E-4077-8459-9583DCEFDAA2

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.